

ciudadano Prefecto de Pátzcuaro, las garantías de los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución General. Hágase saber, publíquese, sáquense y remítanse las copias de estilo y descuenta con las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia. Definitivamente juzgando, lo decretó el ciudadano Juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fé.—*Gabino Ortiz*, una rúbrica.—Ante mí, *Isidro Aleman*, una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Enero 25 de 1875.—*Isidro Aleman*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 11 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan, por el ciudadano Francisco Paredes, por su hijo Ignacio del mismo apellido, contra el ciudadano Prefecto de Pátzcuaro, por violacion de las garantías á que refieren los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución General, proveniente de que acusado Ignacio Paredes de salteador, desde 19 de Setiembre último ha estado reducido á prision, sin que hasta 5 de Noviembre del mismo se haya fundado, ni motivado la causa legal del procedimiento, habiendo trascendido con exeso, el término de la ley, sin que se haya pronunciado el auto de formal prision, ni siquiera se le haya tomado su preparatoria, ni se le haya hecho saber el motivo de su prision; y

Considerando: que segun el informe del Prefecto de Pátzcuaro y otras constancias del expediente, Ignacio Paredes fué consignado al Juzgado de 1ª instancia de Pátzcuaro el 10 de Noviembre antes citado, para que lo juzgara como acusado de la muerte de Roman Acosta; y que esa acusación resultó en una causa sobre plágio formada por el mismo Prefecto de Pátzcuaro, de lo que resulta, que no hay violacion de las garantías que se invocan; de conformidad con lo que dispone el artículo 401 de la Constitución general, Se decreta: que se confirma

la sentencia pronunciada respecto de este juicio á 22 de Febrero último, por el Juzgado de Distrito de Michoacan, que declara: que la Justicia de la Union, no ampara ni protege á Ignacio Paredes, por no haber violado en su persona el ciudadano Prefecto de Pátzcuaro, las garantías de los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución general.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron—*José Maria Iglesias*.—*M. Auza*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramirez*.—*H. Montes*.—*Simon Guzman*.—*L. Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José Garcia Ramirez*.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 12 de 1875.—*Enrique Landa*, secretario.

COMPETENCIA

Suscitada entre los Jueces de Distrito de los Estados de Colima y Nuevo Leon, para conocer de un contrabando de barras de plata.

Pedimento del O. Fiscal de la Suprema Corte.

El fiscal interino dice: que en este expediente jurisdiccional pretenden tener competencia los CC. Jueces de Distrito de los Estados de Colima y Nuevo Leon, para conocer de un contrabando de barras de plata, aprehendido por las fuerzas de las Comandancias militares de Coahuila.

Sencilla es la cuestion que la Sala tiene que resolver. Depende ella principalmente de determinar á punto fijo y en vista de an-

tecedentes que obran en las presentes actuaciones, el lugar en que la aprehension del contrabando se verificó, para designar despues la autoridad que de él debe conocer. Si el hecho tuvo lugar en Coahuila, no cabe duda de que al Juzgado de Distrito de este Estado corresponde su conocimiento, si por el contrario, tuvo verificativo en Nuevo Leon, no la cabe tampoco de que á la Justicia federal del mismo toca decidir el caso é imponer la pena correspondiente á los que resulten culpables.

Y ésto, no solo porque, como dice la ley 15, tít. 1º Part. 7ª: "Por todo yerro, ó mal fecho que alguno ome faga, deve ser apremiado por el Juzgado del lugar, do lo fizo, que cumpla de derecho á los que la acusan dello, maguer sea el mal fechor de otra tierria," regla conforme con las leyes 1ª, tít. 22, de dicha partida, y 1ª, tít. 36, Lib. 12 de la N. R.; "porque allí donde calló en la culpa, reciba la pena" dice esta ley, sino porque el art. 85 del Arancel de 1º de Enero de 1872, aclarado por una circular del Ministerio de Hacienda de 18 de Marzo de 1874, expresamente previene que el Juzgado de Distrito á quien corresponda el lugar de la aprehension, será competente para imponer la pena de que habla y por consiguiente para conocer del contrabando." Siendo el documento de que habla, el art. anterior, dispone el citado del Arancel, el justificante de que los efectos tienen pagados los derechos, toda mercancía que proceda de algun puerto ó frontera y camine sin ese requisito, queda sujeta al pago de tríples derechos, donde se le encuentre, y obligada la oficina que los cobre á enterarlos en la Jefatura de Hacienda del Estado donde se haga la aprehension; dando inmediatamente aviso del hecho á la Secretaría de Hacienda y al Juzgado de Distrito respectivo, para que proceda á hacer la averiguacion correspondiente; como aclaracion del art. 85 del Arancel de 1º de Enero de 1872, dice la circular de Marzo de 1874 referida: el C. Presidente de la República,

TOMO VII—PARTE II.

ha tenido á bien disponer, que todas las aprehensiones de mercancías que se hagan á consecuencia de lo dispuesto en el mencionado art., se consignen al Juzgado de Distrito respectivo á que corresponda el lugar de la aprehension, para que se juzgue y falle el caso con arreglo á la ley."

El lugar de la aprehension determina, pues, por regla general, lo mismo que el de la comision del delito, la competencia de los Tribunales federales en materia de contrabando. Así que, en el caso, preciso es consignar en que parte tuvo lugar la del contrabando de que se trata. Sobre este punto, el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon procedió á levantar una informacion de cuatro testigos, de la que aparece, que por la margen derecha del rio salado y cerca del rancho conocido con el nombre de la "Laja," el C. Jesus Ibarra sargento 1º de la fuerza de las "Colonias Militares de Coahuila," acompañado de algunos soldados, sorprendió á unos contrabandistas que dejaron abandonadas siete barras de plata y otros objetos, como caballos &c. Los testigos, no aseguran si en el rancho de la "Laja," que segun el Juez de Distrito de Nuevo Leon pertenece á la jurisdiccion de este Estado, es donde se encontraron Ibarra y sus soldados con los contrabandistas, y muy al contrario dicen: *Ibarra, que no tiene un conocimiento exacto del terreno; Brambila, que la aprehension fué á inmediaciones de la "Laja," Medina que cerca del rancho de la "Laja" y Gonzalez que le parece que fué abajo de la "Laja."* Manifiestan a lemas todos ellos, que los acompañaba un guía, lo que prueba que no conocian el rumbo que llevaban, pues que necesitaron una persona conocedora de él, que los acompañara.

El Juzgado de Distrito de Coahuila mandó tambien que se levantara una informacion, y que se practicara una vista de ojos, para fijar con toda certeza el punto de la aprehension del contrabando; de los testigos examinados, el C. teniente coronel Ma-

nuel Penat no merece entera fé en su dicho, por ser de oídas, y no presencial del suceso, pues se refiere á una carta que le escribió el coronel Ibarra, Jefe de las fuerzas de las Colonias Militares. No sucede lo mismo con el C. Prdio N. Valdez, por ser nada menos el guía que por ruego del coronel Ibarra, acompañó á la tropa encargada de la persecucion de los contrabandistas; segun su declaracion, el lugar de la aprehension fué uno llamado de los "Calzones," jurisdiccion del Estado de Coahuila; esta declaracion se encuentra corroborada por la vista de ojos, que el Juzgado local de Salinas, exhortado por el Juez de Distrito de Coahuila, practicó en 13 de Febrero del corriente año, y de cuya diligencia, que consta á la foja 24 de las reñitidas á esta Sala por ese Juzgado de Distrito, aparece, que el punto en que el contrabando se aprehendió fué el referido de los "Calzones," que pertenece á rio grande, Estado de Coahuila.

En vista de lo expuesto y despues de un análisis concienzudo de las pruebas relacionadas, el fiscal se inclina á creer que el punto preciso en que el contrabando fué aprehendido, es de la jurisdiccion del Estado de Coahuila.

Y hay ademas dos consideraciones que abonan suficientemente la consecuencia del fiscal.

Consta en autos que la aprehension, la verificaron las fuerzas de las "Colonias Militares de Coahuila," lo que hace cuando menos presumir que en terrenos de este Estado tuvo lugar aquella; pues si hubiera sido en Nuevo Leon, no á esas fuerzas sino á las de éste, se hubiera encargado de la aprehension.

Por otra parte y prestando entera fé á todas las declaraciones reunidas ante el Juez del Juzgado de los Estados mencionados, lo que no puede hacer por la falta de conocimiento del terreno: Confesado por los mismos testigos que lo suscriben, siempre resultará que en Coahuila fué la aprehension, pues que en estas declaraciones

aparece, que el punto en que ésta tuvo lugar, se encuentra cerca del rancho de la "Laja" por la margen derecha del rio Salado, rancho que en los mapas que el que suscribe ha podido consultar, sobre todo en el del Sr. García Cubas, que cuenta en favor de su exactitud con la opinion respetable de las personas mas entendidas en la ciencia geográfica del país, aparece encontrarse en los términos del Estado de Coahuila.

Las anteriores consideraciones de hecho y de derecho han dictado en el ánimo del que suscribe la siguiente proposicion, que somete á la Sala:

Unica. Es competente para conocer del contrabando de siete barras de plata y sus incidentes, sobre que ha versado la presente cuestion jurisdiccional, el Juez de Distrito del Estado de Coahuila, á quien se mandarán remitir las actuaciones originales para su conocimiento.

México, Marzo 20 de 1875.—Lozano.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 14 de 1875.

Vistos los autos promovidos sobre competencia iniciada por el Juez de Distrito de Coahuila, al de igual clase de Nuevo Leon, para conocer del juicio sobre comiso de siete barras de plata aprehendidas en el rancho de la "Laja" y sus incidencias. Vistos los informes de los Jueces competidores, así como lo pedido ante esta 1.^a Sala por el C. Fiscal, con todo lo demas que de autos consta y ver convino.

Considerando: que segun lo prevenido en el art. 85 del Arancel de Aduanas de 19 de Enero de 1872, aclarado por una circular del Ministerio de Hacienda de 18 de Mayo de 1874, está determinado que el Juez de Distrito donde se aprehenden los objetos de contrabando, sea el competente para conocer del juicio respectivo. Que la aprehension de las expresadas barras de plata á las 12 horas criminales de 1875 in-

gar esa aprehension, tuvieron lugar en los límites del Estado de Coahuila. De conformidad con lo pedido por el C. Fiscal se decreta: Que el Juez de Distrito de Coahuila es el competente para seguir conociendo del contrabando de siete barras plata y sus incidentes criminales á que se refiere esta competencia.

Remítanse las actuaciones al Juez de Distrito de Coahuila con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: remítase copia igual al de Nuevo Leon para su conocimiento.

Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Ignacio Altamirano.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landá,* secretario

Es copia. México, Junio 8 de 1875.—*Alejo M. Gomez Ugarte,* Oficial segundo.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. Juan Somellera y Ca, contra un cobro que les hace el Administrador de la Aduana terrestre de Mazatlan.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice.

Los Señores Juan Somellera y Compañía fundan su queja de amparo en las frs. I y III del art. 1º de la ley de amparo de 20 de Enero de 1869, porque creen que el C. Administrador al cobrarles en virtud de las leyes del Estado de 12 de Mayo de

1873 y 18 del mismo mes del corriente año, ha violado las garantías que conceden los arts. 16 y 27 de la Constitución federal, á la vez que por la expedición de esas mismas leyes se invaden las facultades del Congreso de la Union, sin cuyo consentimiento no se pueden imponer contribuciones por los Estados sobre importaciones ó exportaciones conforme al art. 112 de la Constitución, frac. I.

El Promotor fiscal encuentra fundadas en derecho las razones que alegan los reclamantes, y como esta cuestion ha sido ya diversas veces resuelta por la Suprema Corte de Justicia en varios juicios semejantes, cree que en el presente caso procede tambien el amparo que piden los Señores Juan Somellera y Compañía.

El Ciudadano Administrador de la Aduana repite sin embargo en su informe, que cree derogados en favor de los Estados los arts. 19 y 33 del Arancel de Aduanas, vigente por la frac. I del art. único, de la ley de 31 de Mayo de 1872, á pesar de que esos arts. del Arancel fueron derogados unicamente, segun el contesto de la ley, solo en beneficio del Distrito federal y de la California; y sin que por esta resolucion se quebrante de ninguna manera el art. 28 de la Constitución, como sin fundamento infiere el C. Administrador terrestre.

Por todo lo expuesto y refiriéndose el fiscal á las diversas solicitudes de amparo que han sido despachadas favorablemente por ejecutorias de la Suprema Corte, y que no cita por no tenerlas á la vista, pero que existen en el archivo del Juzgado; concluye pidiendo que se sirva declarar, que la Justicia de la Union, ampara y protege á los Señores Somellera y Compañía, contra los procedimientos del C. Administrador de la Aduana Terrestre, por los cobros á que se refiere este juicio.

Mazatlan, Diciembre 7 de 1874.—*L. Gaona.*